



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA V

22009/2024

ARCA c/ CARBONARO ARIEL MATIAS s/EJECUCION FISCAL - ARCA
(Ex A.F.I.P.)

Buenos Aires, de febrero de 2026.-

VISTO y CONSIDERANDO:

I.- Que, a [fs. 82/83](#) el juez de primera instancia resolvió que, si bien formalmente la sentencia del 07/02/2025 adquirió formalmente firmeza, su objeto –la ejecución de una deuda tributaria- había quedado jurídicamente desvirtuado a raíz del dictado de un acto administrativo posterior que reconoce la inexistencia de la misma; y en consecuencia, persiste una causa de nulidad sobreviniente que impide su ejecución. Indicó que, en consecuencia, no correspondía la imposición de intereses sobre un capital declarado inexistente por el propio Fisco. Agregó que, asimismo, dado que la deuda se había reconocido erróneamente como exigible, las costas debían imponerse a la parte actora, en atención al principio general del vencimiento y la errónea prosecución del proceso pese al dictado del acto administrativo mencionado.

Para así decidir, en primer término, efectuó una reseña de la causa. Indicó que en las presentes actuaciones la Administración Federal de Ingresos Públicos había iniciado ejecución contra el Sr. Carbonaro a fin de obtener el cobro de \$81.895.266,77 en concepto de Anticipo 1 del Impuesto a las Ganancias - período fiscal 2024, con más la suma del 15% para responder a intereses y costas.

Señaló que el 07/02/2025, sin que la demandada hubiera opuesto excepciones, se dictó sentencia declarando expedita la vía de ejecución de la deuda reclamada por el Fisco Nacional habilitada para llevarla adelante hasta obtener el íntegro pago del capital de \$81.895.266,77, con más sus intereses e impuso las costas a la demandada.

Indicó que el 12/03/2025 se presentó la demandada y argumentó que el 09/10/2024 había presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una solicitud de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2024, la cual había sido realizada



antes del vencimiento del primer anticipo, que operó el 25 de noviembre de 2024, acompañando dicha solicitud con la documentación respaldatoria requerida por la normativa vigente. Señaló que el 25/02/2025 ARCA dictó el acto administrativo N° 3/2025 (AGM 047) por el cuál aprobó la solicitud de reducción de anticipos presentada el 09/10/2024, con efecto retroactivo desde el Anticipo N° 1, determinando una base de cálculo modificada de \$9.493.716,17; y que, como consecuencia de dicho acto administrativo, quedó expresamente reconocido por la propia administración tributaria que el anticipo reclamado mediante la ejecución fiscal no debía ser pagado, toda vez que fue objeto de la reducción aprobada. Afirmó que, también, y en virtud del art. 14 y 16 de la Resolución General AFIP N° 5211/2022, no correspondía el ingreso de intereses resarcitorios, por haberse presentado el pedido de reducción en forma previa al vencimiento del anticipo en cuestión.

El *a quo* señaló que, del análisis de las constancias de autos, surgía que al momento de la promoción de la demanda (18/12/2024), la deuda reclamada figuraba en el Sistema de Cuentas Tributarias (SCT) como exigible, no habiendo el contribuyente acreditado en esa oportunidad el dictado de resolución favorable a su pedido de reducción de anticipos; asimismo, con fecha 25/02/2025, con posterioridad al dictado de la sentencia del 07/02/2025, la ARCA dictó el acto administrativo que aprueba la solicitud de reducción del Anticipo N.º 1, estableciendo una base de cálculo modificada de \$9.493.716,17. Afirmó que la resolución fue dictada con efecto retroactivo y reflejada en el SCT mediante un contra-asiento de fecha 13/11/2024.

Sostuvo que la jurisprudencia ha sido clara en establecer que el juicio de ejecución fiscal requiere un título cierto, líquido y exigible al momento de su promoción; y que, en consecuencia, no se ha autorizado la incorporación de hechos nuevos teniendo en cuenta que resultan extraños a su esquema procesal, aunque se han admitido la introducción de los mismos, si se tratare de incidentes de nulidad emanados en este tipo de litigios, por considerarse una medida probatoria que podría ser útil para dilucidar dicha cuestión. (vgr. Fallos: Cam, Nac. Com., Sala A, Capital Federal, Sent. Del 22-10-1999 , " San Juan y Solis Alvarez y Di Leva, SA, C/ Conti s/ Ejecutivo", ED 187-293.

Agregó que, asimismo, la documental acompañada por la parte demandada –especialmente el Acto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA V

Administrativo N° 3/2025 y la constancia del contraasiento en el SCT que anula el débito por \$81.895.266,77– demuestra que el propio Fisco ha reconocido expresamente que dicha obligación no debía ser exigida; y que, tal reconocimiento tiene efectos vinculantes y retroactivos.

II.- Que, contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de revocatoria con el de apelación en subsidio (Cfr. [fs. 97/101](#)); el que fue replicado por la contraria a [fs. 109/122](#).

Se agravia de la resolución del *a quo* en cuanto deja sin efecto la sentencia firme de ejecución fiscal del 07/02/2025, se dispone el archivo de las actuaciones y se imponen las costas a su parte.

Sostiene que la deuda tributaria era válida al momento de la ejecución; y que su mandante se encontraba habilitada para promover la ejecución fiscal de conformidad con el artículo 92 de la ley nro. 11.683 y que, la Resolución Administrativa N° 3/2025, dictada el 25/02/2025, que aprobó la solicitud de reducción de anticipos con efectos retroactivos, no puede neutralizar los efectos de una sentencia judicial firme, como tampoco alterar la exigibilidad de la deuda al momento en que fue ejecutada.

Sobre la procedencia de los intereses en caso de reducción retroactiva, indicó lo dispuesto por el artículo 14, tercer párrafo, de la Resolución General AFIP N° 5211/2022 y sostuvo que los intereses deben calcularse sobre el importe original del anticipo determinado conforme el régimen general, aun cuando luego aprueba una reducción; asimismo, que la Resolución General AFIP N° 5246/2022 establece que la solicitud de reducción no tiene efectos suspensivos y requiere aprobación expresa.

Por último se agravia de la imposición de costas.

III.- Que, de manera preliminar, corresponde señalar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado (art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de



aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (Fallos 316:157; 316:3026; 325:3422; 329:2498 entre otros).

En la especie, el apelante se agravia de lo dispuesto por el *a quo*, pero no se hace cargo del fundamento expuesto en el pronunciamiento apelado, en cuanto a que si bien formalmente la sentencia del 07/02/2025 adquirió formalmente firmeza, su objeto –la ejecución de una deuda tributaria– había quedado jurídicamente desvirtuado a raíz del dictado de un acto administrativo posterior que reconoce la inexistencia de la misma; y en consecuencia, persiste una causa de nulidad sobreviniente que impide su ejecución; y que, en consecuencia, no correspondía la imposición de intereses sobre un capital declarado inexistente por el propio Fisco. Tampoco rebate lo expresado en el sentido de que la documental acompañada por la parte demandada –especialmente el Acto Administrativo N° 3/2025 y la constancia del contraasiento en el SCT que anula el débito por \$81.895.266,77– demuestra que el propio Fisco ha reconocido expresamente que dicha obligación no debía ser exigida; y que, tal reconocimiento tiene efectos vinculantes y retroactivos.

En tales condiciones, toda vez que el memorial de agravios de fs. 97/101 no cumple con el requisito de fundamentación adecuada, ya que carece de una crítica concreta y razonada de las motivaciones fácticas y jurídicas del auto apelado (Fallos 334:1302), el recurso en examen no puede prosperar.

IV.- Que, en diferente orden de ideas y con relación al cuestionamiento de las costas de la anterior instancia, cabe destacar que, teniendo en cuenta la forma en que se decide, y que no se advierte que existan motivos suficientes que ameriten apartarse del principio general de la derrota que rige al respecto, ya que la parte demandada resultó totalmente vencida, corresponde rechazar el agravio, con costas (conf. art. 68, primer párrafo y 69 del CPCCN).

En virtud de todo lo expuesto, **SE RESUELVE:** Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (art. 266 del CPCCN); con costas (art. 68 del CPCCN).

Se deja constancia de que la Vocalía Nro. 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA V

Regístrese, notifíquese, y devuélvanse.

GUILLERMO F. TREACY

PABLO GALLEGOS FEDRIANI

